

Christliche Initiative Romero (CIR)
Schillerstraße 44a
48155 Münster

Botschaft der Republik Honduras
Cuxhavener Str. 14
10555 Berlin

Münster, 12 de noviembre de 2018

Carta abierta a la embajadora de la República de Honduras, Sra. Castro Verela, sobre el desalojo violento de un campamento de protesta contra proyectos mineros en Tocoa

Estimada Señora Embajadora,

por la presente, trece organizaciones de la sociedad civil en Alemania y una en Suiza expresamos nuestra preocupación por el uso desmedido de la violencia por parte de militares contra los ciudadanos que han protestado contra el proyecto minero Buena Vista I en el municipio de Tocoa. Gracias a la organización de derechos humanos hondureña ERIC/Radio Progreso nos enteramos de los siguientes hechos:

El 27 de octubre, más de mil efectivos militares y patrullas policiales armados se desplazaron hacia Tocoa. Las mismas fuerzas de seguridad estatal procedieron a desmantelar por la fuerza el campamento de protesta ocupado por unos 200 líderes comunitarios integrantes de la resistencia de Guapinol. Según sus testimonios, los militares usaron cientos de bombas lacrimógenas y la fuerza desmedida en esta acción contra la población civil que resultó en decenas de heridos e intoxicados por gas lacrimógeno, tres personas detenidas por las autoridades y la muerte del defensor Levin Alexander Bonilla. Al día siguiente, personas encapuchadas secuestraron a la activista Irma Serrano junto a sus dos hijas por más de 20 horas, después de que incendiaron su casa. Posteriormente, el 29 de octubre, murieron dos militares en enfrentamientos que se produjeron en el desalojo de activistas que se habían tomado una calle.

Los líderes comunitarios ejercieron su derecho a la protesta manifestándose contra los proyectos de minería de óxido de hierro de la empresa Inversiones Los Pinares, propiedad de Lenir Pérez. Ellos consideran los proyectos ilegales porque la empresa estableció sus operaciones sin que las autoridades estatales hubieran cumplido con su deber de realizar una consulta previa para determinar si la población está de acuerdo o no con los proyectos. Además, se refieren a un reporte de la Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SERNA) de 2012 que advierte de los serios daños medioambientales que ha causado el proyecto Buena Vista I, entre ellos la deforestación desmedida así como la contaminación de aguas y el perjuicio de suministros de agua debido a residuos mineros. La organización COPA señala que el Gobierno modificó el núcleo del Parque Nacional Carlos Escaleras

Mejía para otorgar las concesiones mineras, poniendo en riesgo, de esta manera, los ecosistemas del parque y la salud de los pobladores. Tanto el derecho a la salud (Artículo 12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) como la participación en decisiones que afectan a los ciudadanos (Ley de Municipalidades de Honduras, Artículo 25) constituyen derechos fundamentales de la población hondureña.

Las organizaciones firmantes de esta carta rechazamos la violencia con la que los militares reprimieron a los manifestantes. Varias organizaciones internacionales han advertido de la constante criminalización y la persecución violenta de defensores del medio ambiente y de derechos humanos en Honduras. Según la organización británica Global Witness, Honduras es el país donde más defensores del medio ambiente son asesinados en relación al número de habitantes a nivel mundial. Berta Cáceres es sólo la activista más famosa entre más de 120 víctimas asesinadas desde 2009.

En esta situación marcada por la violencia, el Gobierno de la República de Honduras no debería caer en el error de reprimir a la protesta legítima. La decisión del Gobierno de recurrir a las Fuerzas Armadas para reprimir un conflicto no resuelto acabó por producir la muerte de tres personas. Las autoridades estatales sólo pueden solucionar los conflictos relacionados a proyectos extractivos, tomando el camino del reconocimiento de la protesta y entrar en el diálogo con las comunidades afectadas.

Las organizaciones firmantes exhortamos al Gobierno de la República de Honduras a:

- cesar de manera inmediata la violencia contra los manifestantes, retirando a los militares de las comunidades afectadas;
- impedir que actores privados como agentes de seguridad de la empresa Inversiones Los Pinares violen los derechos de la población,
- fomentar la investigación judicial de los hechos violentos y la reparación de las víctimas;
- impulsar un cabildo abierto para determinar si la población afectada está de acuerdo o no con las concesiones mineras en la región;
- cerrar los proyectos mineros y cancelar las concesiones si la población rechaza la minería en el cabildo abierto;
- cancelar las concesiones si éstas perjudican los ecosistemas del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía (antes Montaña de Botaderos);
- garantizar el saneamiento de los daños medioambientales causados por el proyecto minero;
- velar por que los defensores de derechos humanos y del medio ambiente no sean criminalizados.

Por favor, manténganos informadas sobre las medidas que el Gobierno de la República de Honduras vaya a adoptar para garantizar los derechos fundamentales de la población afectada por los proyectos mineros en Tocoa y de los activistas en Honduras.

Atentamente,

Las organizaciones firmantes:

AWO International, Berlín, Alemania

CounterCurrent, Potsdam, Alemania

Dachverband der Kritischen Aktionäre, Colonia, Alemania

Foro Honduras Suiza

HondurasDelegation, Múnich, Alemania

INFOE, Berlín, Alemania

Informationsstelle Peru, Friburgo, Alemania

Iniciativa Cristiana Romero, Múnster, Alemania

Kampagne Bergwerk Peru, Friburgo, Alemania

Misereor, Aquisgrán, Alemania

PowerShift, Berlín, Alemania

Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Múnich, Alemania

Ökumenisches Netz Rhein-Mosel-Saar, Coblenza, Alemania

WEED, Berlín, Alemania

Contacto: Iniciativa Cristiana Romero (ICR), Christian Wimberger, Schillerstraße 44a

E-Mail: wimberger@ci-romero.de // Tel: 0049 (0) 251 – 67 44 13 - 21



